

El nuevo Gobierno y Catalunya

Xavier Vives



La coalición izquierdista PSOE-UP, apoyada por el moderado PNV, promete un giro social y de distensión en la cuestión catalana. Bienvenidos sean estos propósitos. Sin embargo, la coalición no lo tendrá fácil por dos razones. La primera es que la ajustada investidura (167 síes por 165 noes con la crucial abstención de ERC y Bildu) implica que las medidas de gobierno deberán ser aprobadas una a una y posiblemente con distintas mayorías en las Cortes, máxime teniendo en cuenta que la modificación de una ley orgánica requiere mayoría absoluta. La segunda es que la oposición de los partidos de la derecha a la distensión en el tema catalán será furiosa, y sin tregua en el campo judicial, como hemos visto en el bronco debate de investidura, y será probablemente reforzada por los independentistas partidarios de la vía unilateral.

El programa económico de la coalición tiene un marcado acento social con medidas para revertir parcialmente la reforma laboral del PP, subir sustancialmente el salario mínimo, indiciar las pensiones al coste de la vida e introducir una renta básica. La financiación de estas políticas, en un ejercicio de optimismo, vendría de una subida de impuestos a los salarios elevados, rentas del capital y grandes empresas y de la imposición de la tasa Tobin a las transacciones de acciones españolas. No obstante, no se presenta una memoria económica para ver cómo cuadran las cuentas. Esto es problemático, máxime cuando la coalición se ha comprometido a la estabilidad presupuestaria y la Unión Europea nos reclama un ajuste del déficit de 9.000 millones de euros. Otras políticas relevantes son el control de alquileres y ambiciosos objetivos de fomento de las energías renovables.

Las propuestas de la coalición no explican tampoco cómo se tendrán en cuenta los incentivos de los agentes económicos para que las políticas tengan los efectos deseados. En el pasado ya hemos observado, por ejemplo, las distorsiones provocadas por las subvenciones a las renovables, y cómo las reformas del mercado de trabajo no han acabado con el problema central de la dualidad entre trabajadores protegidos y desprotegidos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha alertado sobre el despilfarro en el gasto público en España. En general, se echa en falta un plan coherente para levantar la productividad de la economía española, verdadera piedra de toque de la prosperidad y del futuro de las pensiones.

El programa plantea el reforzamiento del Estado de las autonomías, una mejora de la

bernanza de infraestructuras (cercañas, puerto, aeropuerto), y protección de competencias en educación.

Quisiera destacar que para que la negociación de estos temas sea provechosa para Catalunya, hay que tener un marco propio adecuado. Lo ilustraré con dos ejemplos. El primero es la necesaria ampliación del aeropuerto. El Ministerio de Fomento propone que la cuarta pista sea en Girona, lo que atenta al sentido común y sólo se puede explicar por las restricciones autoimpuestas. Actualmente, no se utilizan las pistas en El Prat de forma óptima, tal como fueron diseñadas inicialmente, puesto que en condiciones normales los aviones aterrizan en la pista larga en lugar de despegar tal como estaba previsto. Se echa en falta una autoridad metropolitana que pueda tomar decisiones que afecten a la gran Barcelona, y plantear, por ejemplo, la extensión de la tercera pista o incluso, ¡oh anatema!, la construcción de una pista sobre el mar. El segundo ejemplo son los tipos impositivos sobre la renta. La previsión es que el tipo marginal máximo en Catalunya subirá siete puntos, cuatro por parte estatal y tres por parte de la Generalitat. Adivinen cuál será la consecuencia para el mercado de alta cualificación en Barcelona y en Madrid. Para los profesionales en Madrid, el impacto de la subida estatal probablemente será revertido en la comunidad para mantener su estatus de paraíso fiscal de facto. Los profesionales en Barcelona no tendrán alivio y las empresas tenderán a ofrecer los puestos de trabajo en Madrid por el ahorro de costes que supone.

La formación del Gobierno de coalición ofrece la oportunidad de corregir las pérdidas sufridas por amplios sectores sociales después de la crisis, a la vez que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de su programa y el impacto sobre los incentivos de los agentes económicos para que aumente la productividad de la economía. En relación con la cuestión catalana, ofrece un rayo de luz en un problema envenenado. Esperemos que la racionalidad de los distintos actores contribuya a la distensión y a poner las bases de una resolución a largo plazo, así como mejoras tangibles a corto plazo.●



XAVIER CERVERA

Para que la negociación sea provechosa para Catalunya, hay que tener un marco propio adecuado

financiación, la clarificación de las competencias entre Estado y autonomías, e inversiones de matriz no radial tales como los corredores mediterráneo y atlántico. Si se lleva a cabo, representaría una reversión parcial de la política de recentralización de los últimos gobiernos. El acuerdo entre PSOE y ERC plantea una mesa de diálogo bilateral entre los gobiernos de España y de Catalunya, así como una consulta a la ciudadanía de Catalunya sobre sus resultados. La parte catalana haría bien de ir preparada con una propuesta coherente y concreta de mejora de la financiación, la formación del consorcio de la agencia tributaria, inversión y go-